

Dictamen N°: 21319

Expediente N°: 3200-1430/16



Disconforme con la **resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social N° 021/16** que dispuso la designación del profesor Rubén Fabián Flores en el cargo profesor titular dedicación simple en la cátedra Economía Política, el Doctor Mariano Féliz dedujo a fs. 571/581 el recurso previsto en el art. 30 de la Ordenanza 179, por causarle gravamen.

Los agravios pueden resumirse así:

El Prof. Féliz aduce que la resolución es arbitraria toda vez que el dictamen en el que se apoya omite valorar las publicaciones, trabajos científicos y profesionales, ubicándolo en una menor estima en el orden de mérito.

Desacuerda con los criterios de ponderación del jurado respecto de la asignación de puntajes al considerar que desarticula el orden de prioridades del art. 26 de la Ordenanza 179. En este sentido, afirma que da preponderancia a la entrevista personal y a la clase pública por sobre los antecedentes, títulos y publicaciones, trabajos científicos y profesionales.

Que no valora su vasta trayectoria en la docencia y la mejor preparación profesional.

El jurado omite apreciar sus dos doctorados (Universidad de Buenos Aires y en París). Critica que el jurado no haya mencionado que el Prof. Flores no tiene título de posgrado. En su opinión se viola el art. 27 de la Ord. 179 que exige para ser profesor titular poseer título máximo o superior. Y que no concluyó la especialización universitaria.

También cuestiona las expresiones del jurado respecto de sus antecedentes docentes, cuyo inicio en las Universidades Nacionales data del año 1995.

A fs. 574, se queja de la falta de mención de antecedentes como compilador y la publicación de libros de cátedra; que es investigador del Conicet desde el año 2008; consejero directivo de centro de investigaciones desde el año 2011, y la cita de antecedentes de

investigación claves en su experiencia profesional como becas de posgrado del Conicet y externa de investigación en el mismo lugar, pasantías y estancias de investigación en nuestro país, Venezuela y Francia; diecinueve cursos de especialización que comenzaron en 1994, dieciséis cursos de posgrado en los estudios de Maestría y Doctorado. Disiente con lo expresado respecto de la categoría docente-investigador y con relación a los antecedentes en investigación (publicaciones que son superiores por la diferencia cuantitativa y cualitativa que integró veintitrés proyectos de investigación desde el año 2000, su participación en redes internacionales y grupos de trabajo). A la misma conclusión arriba con relación al trabajo de extensión universitaria, transferencia y vinculación con la comunidad, formación de recursos humanos, participación como jurado de tesis, evaluación de proyectos de investigación; que no se tomó en cuenta que en esta Universidad obtuvo el premio a la labor científica, tecnológica y artística en 2012, entre otros.

Refuta las apreciaciones del jurado sobre la clase de oposición a fs. 577/578 y sobre la propuesta pedagógica y la entrevista, que según su criterio infringió el art. 5 del reglamento interno.

En suma, afirma que se llegó a un orden de mérito de modo injustificado, por lo que pide que se deje sin efecto la resolución 021.

**El recurso previsto en el art. 30 de la Ordenanza 179** resulta **admisible** desde que fue interpuesto dentro del plazo legal, conforme surge de las constancias de notificación de lo resuelto a fs. 566 vta. (17.05.2016) y de cargo del recurso a fs. 581 (20.05.2016) y toda vez que se controvierte una resolución del Consejo Directivo que habilita la revisión de lo actuado por el órgano de jerarquía superior, el Consejo Superior, de acuerdo con el art. 56 incisos 1 y 2 del Estatuto Universitario (contralor de legalidad).

Sentado lo anterior, y de forma liminar al análisis de los agravios, corresponde señalar que esta Asesoría Letrada no tiene competencia para analizar el acierto o error de la evaluación del jurado, sino que solamente se ceñirá a verificar si lo resuelto se ajustó a derecho habida cuenta que el Estatuto Universitario y la Ordenanza 179 han

querido que un órgano específico, el jurado, sea el juez de mérito del concurso pues ha sido designado por sus calidades académicas para desempeñar la delicada tarea de seleccionar al candidato más idóneo para ocupar la cátedra universitaria.

Siendo así, el jurado debe desempeñar su tarea de acuerdo con las normas del concurso: Ordenanza 179 y reglamento interno resolución 24/89 (actividad reglada). También despliega su actividad con cierto margen de actuación discrecional. En este sentido procede respetar las opciones valorativas del jurado siempre que sean razonables. En efecto, el jurado tiene ciertas facultades para apreciar las aptitudes, antecedentes, títulos, publicaciones, trabajos profesionales, actividad científica y de extensión, entre otros aspectos relativos a la formación académica de los postulantes.

Cómo inicia cada postulante la clase pública, el léxico empleado, el tono de voz del discurso, los silencios, las pausas, el manejo del tiempo, la capacidad de motivar al alumnado, el ritmo, los ejemplos utilizados, cómo cierra el tema sorteado, son sólo algunas de las facetas que son de observación directa del jurado y que resultan imposibles de repetir o de representarse con idéntica valoración por otras personas u órganos.

Nuestro máximo Tribunal de Justicia tiene dicho desde antiguo en Fallos: 327:2593, entre otros, que *"El control judicial de las decisiones que se adopten en el orden interno de las universidades en punto a la selección del cuerpo docente y de los procedimientos seguidos al efecto, se limita al examen de la razonabilidad de los actos respectivos, es decir, a verificar la ausencia de arbitrariedad manifiesta, por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de las universidades"*.

También ha señalado que *"las resoluciones que dictan las universidades en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente que les es propio no son, como principio, susceptibles de revisión judicial, en tanto en tanto ellas respeten en sustancia los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y no constituyan un*

*proceder manifiestamente arbitrario*" (Fallos: 301: 410, 304:391, 315:701 y sus citas; 323: 620, entre otros).

Es decir, salvo los casos de irrazonabilidad patente o manifiesta, de vulneración de derechos de raigambre constitucional los tribunales de justicia tienen vedado penetrar en cuestiones que por su naturaleza académica le son ajenas.

En suma, la mera disconformidad o la distinta apreciación de las cuestiones sometidas a juicio del tribunal académico no son suficientes para conmovir lo decidido si no se demuestra de modo inequívoco la irrazonabilidad de juicio y/o el apartamiento de las normas que lo regulan.

En el caso *sub examine*, el dictamen de fs. 556/561 suscripto por la totalidad de los miembros del jurado deja ver que la evaluación se ajusta al art. 14 del reglamento interno y presenta debido fundamento (art. 16 de la misma norma). A su vez la resolución 021 satisface el art. 28 de la Ord. 179 toda vez que presenta debido fundamento.

En cuanto a las omisiones de gravedad que según el recurrente el jurado incurrió y en la arbitraria ponderación de antecedentes, que lo ubicaron injustamente en el orden de méritos de fs. 561, la atenta lectura del dictamen muestra que los tres postulantes fueron evaluados en los rubros: **antecedentes, prueba de oposición, entrevista y propuesta pedagógica.**

En los antecedentes, se efectuó la reseña prolija de los títulos obtenidos en universidades nacionales y en el extranjero, del desempeño docente y de sus antecedentes en investigación y profesionales (fs. 556), que en comparación con los otros profesores le asignaron al Dr. Félix una clara ventaja (19 puntos). Los profesores Flores y López obtuvieron 15 puntos.

Me detengo para señalar que el jurado no está obligado a la transcripción de todos los datos académicos que contiene el curriculum vitae. La falta de mención en el dictamen de alguno o algunos de ellos no significa *per se* su falta de ponderación.

Lo que sí el jurado tiene que explicitar es cuál o cuáles han sido los elementos de juicio o los factores de ponderación que lo llevaron a orientar la formación de su opinión y a justificar el orden de mérito.

Y en la especie, opino que actuó correctamente, pues cita aquellos **antecedentes significativos o más demostrativos** de las calidades académicas de cada postulante, en un juicio que como lo señalé más arriba, es privativo y propio de la función del jurado, ajeno a la injerencia de otras personas u órganos distintos del tribunal evaluador.

A fs. 557, el jurado describe la clase pública del recurrente, la ubicación en el plan de estudios, los puntos destacados de la exposición y si existe correspondencia discursiva con el nivel (segundo año) para el que está dirigido, adecuado manejo de los conceptos, ejemplificación, uso de recursos áulicos.

Opino, contrariamente al Prof. Félix que no surge del dictamen la predisposición de los elementos de juicio del art. 26 de la Ordenanza 179 que según su criterio trae aparejada la vulneración del principio de igualdad.

Por el contrario, en los tres postulantes se exhibe igualdad de tratamiento respecto de la valoración de los antecedentes, títulos y demás aspectos demostrativos de la variada y relevante formación de cada uno así como respecto de las virtudes y los defectos de cada disertación.

Obsérvese que el reglamento establece en el art. 14 que la clase de oposición tiene asignada mayor puntaje (hasta treinta puntos). Esto tiene un sentido. En efecto, el objeto del concurso no es seleccionar a los aspirantes con mejores antecedentes o mayores títulos u honores sino establecer cuál de ellos prueban la capacidad del aspirante para ejercer la cátedra del concurso. Y en la clase de oposición es donde se exhibe la claridad y solvencia en la presentación y el desarrollo de los temas dentro del plazo asignado por el reglamento del concurso, y la elección de los recursos en los que se apoya cada postulante que sirven para apreciar los conocimientos en la materia y el

poder de síntesis, entre otros aspectos, que cimentaron cada exposición y que definieron el orden de méritos.

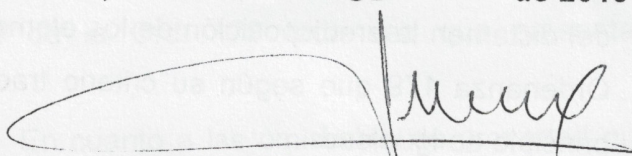
En cuanto a las apreciaciones vertidas sobre la entrevista y la propuesta pedagógica a fs. 557 *in fine* no se advierte la violación al art. 5 del reglamento como lo señala el recurrente toda vez que el jurado tiene facultades suficientes para apreciar su contenido y la correlación con los contenidos de la materia, su puesta en práctica y demás aspectos relacionados con a misma.

Por todo lo hasta aquí señalado, a mi modo de ver, no concurren las circunstancias excepcionales que permiten apartarse de los criterios del jurado pues el procedimiento de selección se produjo sin vicios que afecten la validez de las resoluciones impugnadas.

Aconsejo al Consejo Superior rechazar el recurso del D. Félix y confirmar la resolución 021 por ajustada a derecho.

Dirección Gral. As. Letrada, 27 de Junio de 2016

AAC

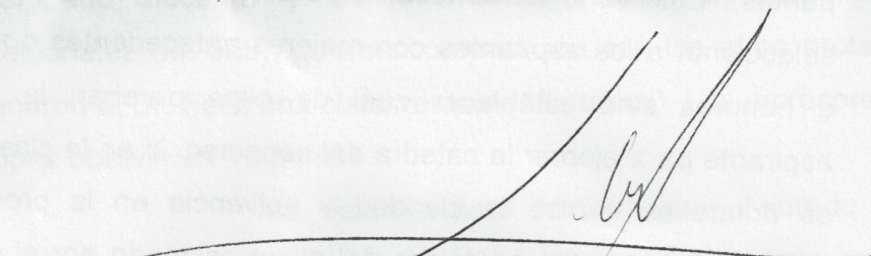


FERNANDO PABLO LEVENE  
Abogado  
Director General de Asesoría Letrada  
Universidad Nacional de La Plata

Con el dictamen que antecede, cuyos términos el suscripto comparte, se remiten las actuaciones al Consejo Superior a sus efectos.

Secretaría de As. Jur. Legales, 27 de Junio de 2016

AAC



ABOG. JULIO CESAR MAZZOTTA  
Secretaría de Asuntos Jurídico - Legales  
Universidad Nacional de La Plata